



**CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR**

Quito, D. M., 15 de noviembre de 2016

**SENTENCIA N.º 363-16-SEP-CC**

**CASO N.º 0128-14-EP**

**CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR**

**I. ANTECEDENTES**

**Resumen de admisibilidad**

El ingeniero Quinche Leonardo Félix López en calidad de rector y representante legal de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”, presentó el 9 de enero de 2014, acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia expedida el 5 de diciembre de 2013, por los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro de la causa N.º 413-2010.

El 17 de enero de 2014, la Secretaría General de la Corte Constitucional certificó que en referencia a la acción signada con el N.º 0128-14-EP, de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del cuarto artículo innumerado agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

En providencia del 30 de enero de 2014, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por los jueces constitucionales María del Carmen Maldonado Sánchez, Ruth Seni Pinoargote y Antonio Gagliardo Loor, admitió a trámite la acción extraordinaria de protección N.º 0128-14-EP.

En virtud del sorteo efectuado por el Pleno del Organismo en sesión extraordinaria del 12 de febrero de 2014, correspondió la sustanciación de la causa N.º 0128-14-EP, al juez constitucional, Manuel Viteri Olvera, quien en providencia del 21 de abril de 2015, avocó conocimiento y dispuso que se notifique con el contenido de la demanda de acción extraordinaria de protección a los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.

**Decisión judicial que se impugna**

La decisión judicial impugnada es la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2013 a las 12:50, dentro de la causa N.º 413-2010, por los jueces de la Sala de lo

Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, que en su parte pertinente, establece:

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Quito, 05 de diciembre de 2013, las 12h50 (...) 3.5.1.- En lo que se refiere al artículo 76 numeral 7, literal l) de la Constitución del Ecuador (...) La motivación de la sentencia, según Carnelutti consiste en el razonamiento suficiente para que de los hechos que el juez percibe, un hombre sensato pueda sacar la última conclusión en la parte resolutive. Naturalmente, cuando hay falta de motivación, o ésta adolece de errores de tal magnitud que sea la causa suficiente para que el Tribunal a quo haya llegado a las conclusiones de la parte resolutive, el Tribunal de casación debe invalidar el fallo y dictar otro en reemplazo. 3.5.2. La norma que transcribe el recurrente es el fundamento principal de la motivación de las resoluciones en las instituciones del Estado, sin embargo alegarla por sí sola, sin precisar sobre qué hechos probados dicha norma ha sido infringida, no es suficiente para configurar un fundamento deliberativo dentro del presente proceso; por otra parte la motivación se concibe como uno de los requisitos fundamentales que deben observar los fallos, por lo que su omisión se encuadraría en la causal quinta y no en la primera como equivocadamente arguyó el legitimario, por consiguiente **la pretensión de que se case la sentencia por una supuesta infracción del artículo 76 numeral 7, literal l) de la Constitución del Ecuador, es improcedente** (...) 3.6.2. En el numeral décimo segundo de la sentencia se determina que: “el artículo 233 de la citada Carta Magna, establece que: Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”... en la especie solo consta la resolución administrativa impugnada (...) 3.6.3. Luego del estudio de la alegación del recurrente y del fallo recurrido, **esta Sala determina que el artículo 96 literal a) de la LOSSCA fue interpretado correctamente respecto de los hechos dados por cierto en el fallo**; por cuanto al haberse alegado la causal primera, el análisis casacional debe partir de los hechos verificados del proceso contencioso; tal es el caso que la Sala de instancia estableció en su decisión que en la etapa contenciosa no se incorporó el respectivo expediente administrativo contentivo del sumario cuestionado, por lo que a entender de esta Sala no se pudo verificar si se respetó el debido proceso en dicho procedimiento, por lo que se declaró nulo el acto administrativo impugnado, silogismo distinto y ajeno al extraño argumento del recurrente, de que se mal interpretó la norma denunciada... Por las consideraciones expuestas, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA (...) rechaza el recurso de casación interpuesto.**

### **Detalle y fundamento de la demanda**

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.º 4 de Portoviejo dictó sentencia el 20 de noviembre de 2009, dentro del juicio contencioso administrativo N.º 57-2009, planteado por el licenciado Eduardo Florentino





Avellán Mora en contra de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”. La referida sentencia declara la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución dictada el 17 de diciembre de 2008, por el rector de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”, por el que se destituye al actor del cargo de profesional 1.

Tanto el doctor Jaime Andrés Robles Cedeño, director regional de la Procuraduría General del Estado con sede en Portoviejo, como el ingeniero Quinche Leonardo Félix López, rector de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”, interpusieron recurso de casación en contra de la sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.º 4 de Portoviejo, dictada el 20 de noviembre de 2009, dentro de la causa N.º 57-2009.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, mediante providencia del 26 de abril de 2011, admitió a trámite únicamente el recurso de casación planteado por el director regional de la Procuraduría General del Estado con sede en Portoviejo, mientras que el recurso de casación interpuesto por el rector de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López” fue inadmitido por incumplir los artículos 3 y 6, causales 1 y 3 de la Ley de Casación.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia el 5 de diciembre de 2013, dentro de la causa signada con el N.º 413-2010, en la que se resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto por el director regional de la Procuraduría General del Estado con sede en Portoviejo.

Manifiesta el accionante que la sentencia de casación expedida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, no analizó las vulneraciones legales producidas en la decisión emitida el 20 de noviembre de 2009, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.º 4 de Portoviejo, dentro del juicio contencioso administrativo N.º 57-2009.

Indica el legitimado activo que en la sentencia de casación, que se impugna con la acción extraordinaria de protección, no se analizan los argumentos esgrimidos en el recurso de casación interpuesto por las partes; situación que ha vulnerado el derecho a la motivación consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República.

El legitimado activo considera que los jueces integrantes de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia vulneraron sus derechos constitucionales, sobre todo en relación al debido proceso en la garantía de la motivación, al dictar la sentencia impugnada.

### **Pretensión concreta**

En atención a lo expuesto en su escrito de interposición de la acción extraordinaria de protección, el legitimado activo solicita a esta Corte que:

1. Se deje sin efecto la sentencia de 05 de diciembre de 2013, a las 12h50, dictada por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador en recurso de casación, por la que yendo más allá de su competencia y violando derechos constitucionales y al debido proceso, no casa la sentencia de 20 de noviembre de 2009, a las 11h55, y el auto de 10 de diciembre de 2009 a las 14h25, dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.º 4 de Portoviejo, la que también debe ser dejada sin efecto.
2. Declaren que la sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, el 5 de diciembre de 2013, a las 12h50 dentro del recurso de casación N.º 413-2010 ha violado los derechos constitucionales invocados en esta acción.
3. Se ordene la reparación integral, material e inmaterial de los derechos constitucionales vulnerados, solventándose la grave violación de los derechos enumerados en el apartado séptimo de esta acción, conforme el número 8 del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, especialmente se servirán disponer las siguientes medidas:
  - 3.1. Se declare la nulidad de la sentencia referida, por falta de motivación; y,
  - 3.2. Se disponga, en primera providencia, la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador el 5 de diciembre de 2013 a las 12h50, dentro del recurso de casación N.º 413-2010.

### **Identificación de los derechos presuntamente vulnerados**

Del contenido de la acción extraordinaria de protección se desprende que la alegación principal de vulneración de derechos constitucionales por parte del legitimado activo tiene relación con el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República.





## **Contestación a la demanda**

### **Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia**

A foja 26 del expediente constitucional, mediante oficio N.º 46-MTPV-SCT-2015 del 28 de abril de 2015, comparecen la jueza nacional Maritza Tatiana Pérez Valencia y los conjuces Magaly Soledispa Toro y Francisco Iturralde, jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, quienes en lo principal, manifiestan:

Que respecto a la alegación de falta de motivación que se hacía de la sentencia, la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo concluyó que: “La norma que transcribe el recurrente es el fundamento principal de la motivación de las resoluciones de las Instituciones del Estado, sin embargo alegarla por sí sola, sin precisar sobre qué hechos probados dicha norma ha sido infringida, no es suficiente para configurar un fundamento deliberativo dentro del presente proceso; por otra parte la motivación se concibe como uno de los requisitos fundamentales que deben observar los fallos, por lo que su omisión se encuadraría en la causal quinta y no en la primera como equivocadamente arguyó el legitimario, por consiguiente la pretensión de que se case la sentencia por una supuesta infracción del artículo 76, numeral 7, literal 1) de la Constitución del Ecuador, es improcedente”.

Que respecto de los alegatos, la supuesta errónea interpretación del artículo 96 literal a de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, al amparo de la causal primera, la Sala concluyó que: “Sin que se pueda entrar a analizar el yerro denunciado en mérito de la fundamentación y causal alegada y sin que sea meritorio considerar las demás alegaciones propuestas por el recurrente”.

Es por estas razones que los jueces nacionales consideran que: “De lo expuesto, se puede concluir que los vicios argumentados por el recurrente, fueron mal fundamentados, e invocados por la causal equivocada, por lo que esta Sala los desechó por no encontrar que se configuraran en el presente caso ...”.

Concluyen sosteniendo que: “El fallo de casación que es objeto de acción extraordinaria de protección, ha sido dictado en estricto cumplimiento de las normas constitucionales y de conformidad con lo que prescribe la Ley de

Casación, observando cada uno de sus requisitos y efectuando el control de legalidad que la ley exige”.

### **Procuraduría General del Estado**

Comparece el abogado Marcos Edison Arteaga Valenzuela en calidad de director nacional de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, mediante escrito ingresado el 29 de abril de 2015, constante a foja 23 del expediente constitucional, señalando casilla constitucional para los fines pertinentes.

### **Audiencia Pública**

El Pleno de la Corte Constitucional, mediante auto del 18 de agosto de 2016, convocó a las partes y a los terceros interesados a una audiencia pública a efectuarse durante la sesión ordinaria realizada el 25 de agosto de 2016.

Al efecto, en el día y hora fijados en el auto en mención, comparecieron ante el Pleno de la Corte Constitucional, el abogado Ernesto Murillo en representación de la parte accionante, economista Miryam Elizabeth Félix López, rectora de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”, y como tercero interesado, el señor Eduardo Florentino Avellán Mora, representado por la abogada Ivette Miranda Galarza.

## **II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL**

### **Competencia**

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191 numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 3 numeral 8 literal c y tercer inciso del artículo 46 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.





### **Naturaleza jurídica, alcances y efectos de la acción extraordinaria de protección**

La acción extraordinaria de protección se origina como un mecanismo de control sobre la constitucionalidad de las actuaciones de los órganos judiciales específicamente, en el presente caso, sobre los actos de los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, cuya decisión judicial se impugna; quienes, en ejercicio de la potestad jurisdiccional conferida constitucional y legalmente, administran justicia y por ende se encuentran llamados a asegurar que el sistema procesal sea un medio para la realización de la justicia y hacer efectivas las garantías del debido proceso.

En tal virtud, la Corte Constitucional, como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional, en razón de lo prescrito en el artículo 429 de la Constitución de la República, en el trámite de una acción extraordinaria de protección, debe constatar que efectivamente, las sentencias, autos y resoluciones con fuerza de sentencia, se encuentren firmes o ejecutoriados y que durante el juzgamiento, no se haya vulnerado por acción u omisión, el derecho constitucional al debido proceso u otro derecho consagrado en la Carta Magna.

La acción extraordinaria de protección propende, de conformidad con lo establecido tanto en la Constitución de la República como en la jurisprudencia de este Organismo, que las vulneraciones de derechos constitucionales no queden en la impunidad, para lo cual esta garantía permite que las sentencias, autos y resoluciones firmes y ejecutoriadas sean objeto de revisión por parte del más alto órgano de control de constitucionalidad, la Corte Constitucional.

En este orden de ideas, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, mediante la sentencia N.º 003-13-SEP-CC, dictada dentro del caso N.º 1427-10-EP, señaló que "... la esencia de esta garantía es tutelar los derechos constitucionales, a través del análisis que este órgano de justicia constitucional realiza respecto de las decisiones judiciales".

Finalmente, este Organismo en su sentencia N.º 018-13-SEP-CC, dentro de la causa N.º 0201-10-EP, estableció que por medio "... de la acción extraordinaria de protección, el juez constitucional tiene la facultad de analizar sustancialmente la cuestión controvertida, y de ser el caso, está obligado a declarar la violación de uno o varios derechos constitucionales, ordenando inmediatamente su reparación integral".

## **Análisis constitucional**

Con las consideraciones anotadas y los elementos fácticos que se desprenden de la demanda de acción extraordinaria de protección presentada por el ingeniero Quinche Leonardo Félix López en calidad de rector y representante legal de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”, la Corte Constitucional sistematizará el análisis del caso concreto, a partir de la formulación y solución del siguiente problema jurídico:

**La sentencia dictada el 5 de diciembre de 2013 a las 12:50, dentro del recurso de casación N.º 413-2010, por los jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, ¿vulnera el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación, establecido en el artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República?**

La Corte Constitucional ha establecido que el artículo 76 de la Constitución de la República, consagra un amplio catálogo de garantías que configuran el derecho al debido proceso, el cual consiste en “... un mínimo de presupuestos y condiciones para tramitar adecuadamente un procedimiento y asegurar condiciones mínimas para la defensa, constituyendo además una concreta disposición desde el ingreso al proceso y durante el transcurso de toda la instancia, para concluir con una decisión adecuadamente motivada que encuentre concreción en la ejecución de lo dispuesto por los jueces...”<sup>1</sup>.

Dentro de tal catálogo de garantías encontramos en el numeral 7 literal I, el deber de motivar toda resolución que emane de los poderes públicos so pena de ser consideradas nulas<sup>2</sup>.

En concordancia con la norma constitucional, el artículo 4 numerales 9 y 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, determina que la justicia constitucional se fundamenta en los siguientes principios:

9. Motivación.- La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso.

<sup>1</sup> Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 200-12-SEP-CC, caso N.º 0329-12-EP.

<sup>2</sup> Constitución de la República del Ecuador, artículo 76 numeral 7 literal I: Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.







10. Comprensión efectiva.- Con la finalidad de acercar la comprensión efectiva de sus resoluciones a la ciudadanía, la jueza o juez deberá redactar sus sentencias de forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo las cuestiones de hecho y de derecho planteadas, y el razonamiento seguido para tomar la decisión que adopte...

En este contexto, la motivación implica un ejercicio jurisdiccional enfocado a explicar ordenadamente las razones que llevan a la autoridad judicial a emitir una decisión. Por tal razón, la motivación constituye la garantía principal e imprescindible para una correcta administración de justicia dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia como es el ecuatoriano.

En el caso *sub judice*, el accionante señala que la sentencia de casación que se impugna, expedida por los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, carece de motivación, por cuanto tergiversa los hechos del caso, razón por la que debe realizarse el examen de constitucionalidad de tal decisión a la luz de los tres parámetros establecidos en la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional especialmente, en las sentencias Nros. 010-14-SEP-CC y 017-14-SEP-CC, a saber: razonabilidad, lógica y comprensibilidad.

### **Razonabilidad**

El Pleno de la Corte Constitucional, en la sentencia N.º 202-14-SEP-CC, dictada dentro del caso N.º 0950-13-EP, estableció respecto del requisito de la razonabilidad que este "... no se agota exclusivamente en las disposiciones normativas de naturaleza constitucional en las que la autoridad funda su decisión sino también respecto de aquellas de naturaleza inferior así como también en la pertinencia de éstas con el proceso puesto en su conocimiento".

Así, la razonabilidad consiste en que la resolución guarde armonía con los preceptos constitucionales y legales que integran nuestro ordenamiento jurídico y que estos sean pertinentes al caso concreto.

Del examen que se realiza a la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2013, dentro del recurso de casación N.º 413-2010, por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, se observa que la sentencia empieza enunciando las normas relativas a la competencia de la que la ley le enviste a la jueza ponente para conocer y resolver el presente caso, estas son el artículo 1 de la Ley de Casación y el artículo 185 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como las resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura para conformar la Corte Nacional de Justicia y designar a los jueces que la componen.

En el acápite tercero, denominado “Motivación y resolución de los problemas jurídicos”, la sentencia cita el artículo 3 de la Ley de Casación y la causal primera alegada, en relación con las normas de derecho de las que se pide el control de legalidad, estas son dos: el artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República y el artículo 96 literal a de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

De este modo se observa que la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2013, por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, cumple con el parámetro de razonabilidad, al haber aplicado normas pertinentes a la naturaleza propia del recurso de casación.

### **Lógica**

En cuanto al segundo parámetro de la motivación, se denota que la norma constitucional precisa que todas las resoluciones de los poderes públicos deben ser estructuradas de forma “lógica”, es decir guardando coherencia con las premisas, y entre estas, y la conclusión.

Al examinar la sentencia expedida el 5 de diciembre de 2013, dentro de la causa N.º 413-2010, por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, se advierte que en ella se analizó la legalidad de la sentencia expedida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N.º 4 con sede en Portoviejo, dentro de la causa N.º 57-2009, en base a las dos normas acusadas por el recurrente en su recurso de casación; de modo que conviene examinar las premisas y conclusión constantes en la *ratio decidendi*, asimismo, respecto de cada una de las normas invocadas y que sirvieron de sustento a la decisión final de la Sala, así:

En lo que respecta a la primera norma invocada, el recurso de casación acusa la errónea interpretación del artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República, de allí que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia establece como primera premisa que las decisiones judiciales deben estar debidamente motivadas, lo que implica enunciar la normas o principios jurídicos en los que se basa la decisión, así como su pertinencia en relación a los hechos; consecuencia de lo cual, ante la falta de motivación en la decisión del tribunal a quo, el Tribunal de Casación debe invalidar el fallo y dictar otro en su lugar.





Como segunda premisa, la Sala establece que –en el caso concreto–, el recurrente no ha explicado de qué manera se produce el yerro en la interpretación del artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República, sino que se ha limitado a hacer una simple mención en su recurso de casación. En vista de ello, la Sala determinó:

La norma que transcribe el recurrente es el fundamento principal de la motivación de las resoluciones de las Instituciones del Estado, sin embargo, alegarla por sí sola, sin precisar sobre qué hechos probados dicha norma ha sido infringida (...) por otra parte la motivación se concibe como uno de los requisitos fundamentales que deben observar los fallos, por lo que su omisión se encuadraría en la causal quinta y no en la primera como equivocadamente arguyó el legitimario, por consiguiente la pretensión (...) es improcedente.

En otras palabras, la Sala concluye que la alegación de la norma, por sí sola, no es suficiente fundamentación y no procede casar la sentencia por error en la interpretación del artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República.

Al respecto, esta Corte estima necesario hacer algunas precisiones. En primer lugar, es importante señalar que el recurso de casación, por su papel extraordinario, tiene marcados condicionamientos y requisitos para su presentación, tramitación y resolución. No se trata de un recurso ordinario más ni de una instancia adicional, sino de un recurso extraordinario, diseñado para armonizar la aplicación e interpretación de las normas legales en el ordenamiento jurídico interno.

En esta línea, el recurso de casación cuenta con una normativa especializada, previa, clara y pública que determina con claridad las etapas y el procedimiento a seguirse, los que se encuentran previstos en la Ley de Casación y en las demás normas especializadas, dependiendo de cada rama. Por consiguiente, es obligación de los jueces aplicar las garantías del debido proceso, la normativa vigente y los principios procesales en todas las etapas de tramitación del recurso, ya que su desconocimiento acarrea la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la seguridad jurídica.

Consecuentemente, el ámbito de competencia de las Salas de Casación, se circunscribe a un análisis de legalidad; es decir, respecto de normas infraconstitucionales sobre la base de las causales establecidas en el artículo 3 de la Ley de Casación. De este modo, el pedido del recurrente de analizar bajo el

cargo de la causal primera, una supuesta errónea interpretación del artículo 76 numeral 7 literal I, sin que se exprese norma infraconstitucional alguna sobre la cual se haya incurrido en errores de aplicación e interpretación, no constituye objeto de examen por parte de las Salas de la Corte Nacional de Justicia.

Adicionalmente, es necesario señalar que la Ley de Casación establece las fases, requisitos y límites que este recurso tiene. Al respecto, es importante precisar que en el conocimiento del recurso de casación, el ámbito competencial de los jueces nacionales se encuentra delimitado en razón de cada etapa que lo conforma.

La admisibilidad del recurso de casación se encuentra regulada en el artículo 8 de la Ley de Casación, donde se determina que los jueces nacionales deberán examinar si el recurso ha sido debidamente concedido, de conformidad con lo que dispone el artículo 7, respecto de la calificación hecha del mismo por los jueces de instancia, y en la primera providencia se deberá declarar si se admite o se rechaza el recurso de casación; si lo admite a trámite, procederá conforme lo previsto en el artículo 13, si lo rechaza, devolverá el proceso al inferior<sup>3</sup>.

La resolución del recurso de casación tiene por objeto analizar las pretensiones y argumentaciones del recurrente mediante la expedición de la sentencia. En este punto, conforme la Corte ha reiterado en sus decisiones, corresponde a los jueces nacionales el análisis de la sentencia recurrida en relación con la normativa legal supuestamente transgredida encontrándose impedidos de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, pues hacerlo vulneraría el principio de preclusión procesal<sup>4</sup>.

Como se observa, las fases que componen el recurso de casación se encuentran perfectamente delimitadas y poseen sus características propias, lo que le otorga un orden consecutivo al proceso, permitiéndoles a las partes tener certeza sobre las actividades procesales que se van a desarrollar en cada una de las fases y bajo qué parámetros van a hacerlo. Esto tiene relación directa con el principio de preclusión procesal, el mismo que ha sido concebido por la Corte Constitucional

<sup>3</sup> Artículo 8 de la ley de casación. ADMISIBILIDAD.- Cuando concurren las circunstancias señaladas en el artículo 7, el juez o el órgano judicial respectivo, dentro del término de tres días, concederá el recurso y notificará a las partes.

Concedido el recurso el mismo juez u órgano judicial dispondrá que se obtengan las copias necesarias para la ejecución de la sentencia o auto y, en la misma providencia ordenará que se eleve el expediente a la Corte Suprema de Justicia y las copias al juez u órgano competente para la ejecución del fallo.

Recibido el proceso y en el término de quince días, la Sala respectiva de la Corte Suprema de Justicia examinará si el recurso de Casación ha sido debidamente concedido de conformidad con lo que dispone el artículo 7, y en la primera providencia declarará si admite o rechaza el recurso de Casación; si lo admite a trámite, procederá conforme lo previsto en el artículo 13; si lo rechaza devolverá el proceso al inferior.

<sup>4</sup> Corte Constitucional del Ecuador, sentencias Nros. 001-13-SEP-CC, 008-13-SEP-CC, 020-13-SEP-CC, 034-13-SEP-CC, 067-13-SEP-CC, 072-13-SEP-CC, 084-13-SEP-CC, 77-14-SEP-CC y 129-14-SEP-CC.





“... como aquel que asegura que las fases que componen los procesos judiciales sean respetadas por los administradores de justicia a efectos de tutelar, que superada una fase, no se pueda volver a ella en una fase posterior”<sup>5</sup>. Este principio es fundamental para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, pues no solo le da certeza a las partes, sino que permite que los procesos no se vuelvan interminables.

En la misma línea de ideas, la Corte Constitucional ha precisado que: “... de conformidad con lo que establece el principio de preclusión procesal, los procesos judiciales (...) están conformados por diversas etapas que se desarrollan en forma sucesiva, cada una de las cuales supone la clausura definitiva de la anterior, de manera que no es posible el regreso o la renovación de momentos procesales ya extinguidos y consumados”<sup>6</sup>.

Por lo que una vez superada una de las fases previstas para la tramitación del recurso de casación, no se puede volver a dar paso a actos procesales que ya fueron ejecutados en su debido momento pues –hacerlo–, constituiría una flagrante vulneración del derecho constitucional a la seguridad jurídica, en tanto aquello atentaría contra la previsibilidad de la aplicación normativa en los diferentes momentos que componen un proceso, afectando además el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Ahora bien, del estudio de la sentencia impugnada, se desprende que los jueces nacionales, luego del análisis de la fundamentación del recurrente, concluyen que:

La norma que transcribe el recurrente es el fundamento principal de la motivación de las resoluciones en las instituciones del Estado, sin embargo alegarla por sí sola, sin precisar sobre qué hechos probados dicha norma ha sido infringida, no es suficiente para configurar un fundamento deliberativo dentro del presente proceso; por otra parte la motivación se concibe como uno de los requisitos fundamentales que deben observar los fallos, por lo que su omisión se encuadraría en la causal quinta y no en la primera como equivocadamente arguyó el legitimario, por consiguiente **la pretensión de que se case la sentencia por una supuesta infracción del artículo 76 numeral 7, literal 1) de la Constitución del Ecuador, es improcedente.**

Con lo que se verifica que los jueces se limitan a un análisis formal propio de la admisibilidad del recurso, sin entrar a conocer temas de fondo, vulnerando el principio de preclusión procesal, el cual les obligaba a los jueces nacionales a

<sup>5</sup> Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 234-15-SEP-CC dictada dentro del caso N.º 1897-12-EP.

<sup>6</sup> Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 115-15-SEP-CC dictada dentro del caso N.º 980-12-EP.

realizar el control de legalidad de las normas que habían sido admitidas a trámite al amparo de la causal primera.

Al no haberse pronunciado sobre temas de fondo del recurso de casación, que habían sido admitidos a trámite, y por lo tanto, al volver a calificar la admisibilidad del mismo, los jueces vulneraron el derecho de las partes a la seguridad jurídica, pues existen normas previas, claras y públicas que regulan las fases del recurso de casación, que no fueron observadas por los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Por las razones expuestas, la decisión judicial impugnada incumple el requisito de lógica.

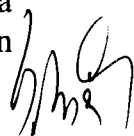
### **Comprensibilidad**

Con respecto a este requisito para la configuración de la garantía de la motivación de las sentencias judiciales, la Corte Constitucional ha señalado:

El tercer requisito de la motivación, la comprensibilidad, desarrollado en el artículo 4 numeral 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, bajo el nombre de 'comprensión efectiva' entendida como la obligación de un juez para redactar sus sentencias de forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo las cuestiones de hecho y derecho planteadas y el razonamiento seguido para tomar la decisión que adopte...

Se puede advertir respecto del caso *sub judice*, que si bien la decisión judicial impugnada se encuentra redactada con un lenguaje claro formulado a partir del empleo de palabras sencillas, el análisis jurídico contenido en la misma, al no respetar las fases del recurso de casación, permite que esta no pueda ser comprendida por parte del auditorio social, por tanto este requisito es incumplido. Dicho de otro modo, al no cumplir con el requisito de la lógica, la sentencia pierde comprensibilidad en la medida en que no se entiende el por qué se ha desnaturalizado la esencia del recurso de casación.

Por las consideraciones expuestas, se evidencia que la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2013, por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación N.º 413-2010, al incumplir con los elementos analizados, no se encuentra debidamente motivada conforme lo determinado en el artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República.





Finalmente, la Corte Constitucional recuerda a los juzgadores que la aplicación que se debe realizar a las decisiones judiciales es integral; es decir, son los argumentos centrales que sostienen la decisión lo que junto con esta, deben ser observados para la resolución de la causa por parte de los jueces casacionales.

La Corte Constitucional ha sido enfática al señalar que la aplicación de las decisiones constitucionales es integral; así, en las sentencias Nros. 003-16-SEP-CC; 004-16-SEP-CC; 012-16-SEP-CC; 017-16-SEP-CC; 019-16-SEP-CC; 025-16-SEP-CC; 036-16-SEP-CC; 038-16-SEP-CC; 049-16-SEP-CC; 052-16-SEP-CC; 055-16-SEP-CC<sup>7</sup>, como en el auto de verificación dictado dentro del caso N.º 0042-10-IS, este Organismo ha determinado que es de obligatorio cumplimiento y sujeción, la *decisum* o resolución, así como los argumentos centrales que son la base de dicha decisión y que constituyen la *ratio decidendi*. Este criterio incluso ha sido recogido por la normativa del Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 101, que dispone "... para apreciar el alcance de la sentencia, se tendrá en cuenta no solo la parte resolutive, sino también la motivación de la misma".

### III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente:

#### SENTENCIA

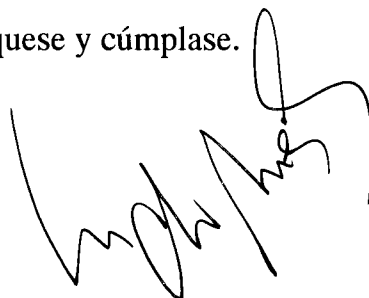
1. Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República.
2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.
3. Como medidas de reparación integral se dispone:
  - 3.1. Dejar sin efecto la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2013 a las 12:50, por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.

<sup>7</sup> Corte Constitucional del Ecuador dentro del caso N.º 1334-15-EP; 1469-12-EP; 1705-13-EP; 0970-14-EP; 0542-15-EP; 1816-11-EP; 1113-15-EP; 1156-14-EP; 0431-15-EP; 0359-12-EP; 0435-12-EP.

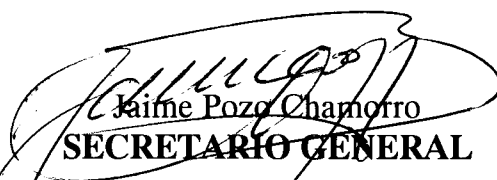
3.2. Retrotraer los efectos del proceso hasta el momento anterior a la emisión de la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2013 a las 12:50, por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación N.º 410-2010.

3.3. Disponer que previo sorteo, otros jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia conozcan y resuelvan el recurso extraordinario de casación presentado, de conformidad con la Constitución de la República, la ley y la aplicación integral de esta decisión constitucional, esto es considerando la *decisum* o resolución, así como los argumentos centrales que son la base de la decisión y que constituyen la *ratio decidendi*.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.



Alfredo Ruiz Guzmán  
**PRESIDENTE**



Jaime Pozo Chamorro  
**SECRETARIO GENERAL**

**Razón:** Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con nueve votos de las señoras juezas y señores jueces: Francisco Butiñá Martínez, Pamela Martínez de Salazar, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaíza, Manuel Viteri Olvera y Alfredo Ruiz Guzmán, en sesión del 15 de noviembre del 2016. Lo certifico.





CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR

Caso N.º 0128-14-EP

Página 17 de 17

JPCH/mv  
*da*

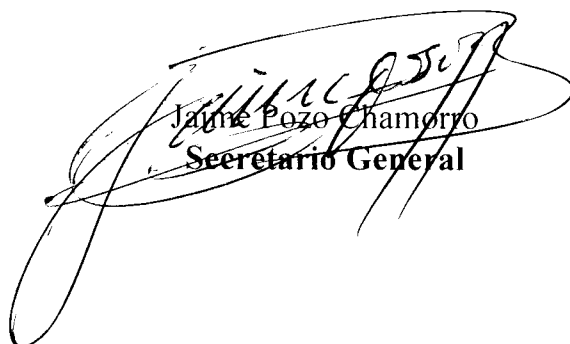
*Jaime Pozo Chamorro*  
SECRETARIO GENERAL



**CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR**

**CASO Nro. 0128-14-EP**

**RAZÓN.-** Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el señor Alfredo Ruíz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día jueves 01 de diciembre del dos mil dieciséis.- Lo certifico.

  
Jaime Pozo Chamorro  
Secretario General

JPCH/JDN



CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR

**CASO Nro. 0128-14-EP**

**RAZÓN.-** Siento por tal que, en la ciudad de Quito, al primer día del mes de diciembre de dos mil dieciséis, se notificó con copia certificada de la **Sentencia Nro. 363-16-SEP-CC** de 15 de noviembre de 2016, a la Rectora de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix López”, en la casilla judicial **150**, y mediante el correo electrónico [rektorado@espam.edu.ec](mailto:rektorado@espam.edu.ec); al señor Eduardo Florentino Avellán Mora, en la casilla constitucional **361**, y en la casilla judicial **3908**; y, al Procurador General del Estado, en la casilla constitucional **018**. **Además, a los dos días del mes de diciembre de dos mil dieciséis**, se notificó con copia certificada de la Sentencia referida, a los Jueces del Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, con **Oficio Nro. 6224-CCE-SG-NOT-2016**; y, **a los cinco días del mes de diciembre de dos mil dieciséis**, a los Jueces del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo Nro. 4, mediante **Oficio Nro. 6259-CCE-SG-NOT-2016**, con el cual se devolvió los expedientes originales Nro. 57-2009, de primera instancia y Nro. 413-2010, de segunda instancia, conforme consta de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-

  
Jaime Pozo Chamorro  
Secretario General

JPCh/AFM



**CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR**

**GUÍA DE CASILLEROS JUDICIALES No. 785**

ACTOR	CASILLA JUDICIAL	DEMANDADO O TERCER INTERESADO	CASILLA JUDICIAL	Nro. DE CASO	FECHA DE RESO. SENT. DICT. PROV. O AUTOS
RECTORA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ "MANUEL FÉLIX LÓPEZ"	150	EDUARDO FLORENTINO AVELLÁN MORA	3908	0128-14-EP	SENTENCIA NRO. 363-16-SEP-CC DE 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016
DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN SALUD PÚBLICA INSPI	1652	-	-	0235-13-EP	SENTENCIA NRO. 361-16-SEP-CC DE 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016
JAVIER ALBERTO SOLÓRZANO ÁLAVA	1026	-	-	2131-15-EP	AUTO DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016
ROBINSON FROILAN RODRÍGUEZ SUÁREZ	152	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1184	1539-16-EP	AUTO DE 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016
CARLOS ANDRÉS PASTOR PAZMIÑO Y OTROS	702	DANILO OMAR DUQUE JIBAJA	5711	0673-16-EP	AUTO DE 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016
		WASHINGTON ACEVEDO FLOR Y OTROS	4398		
		CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE VARONES	1080		
		CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE MUJERES	1155		
		DEFENSORÍA PÚBLICA PENAL DE PICHINCHA	5387; 1537		
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GLOBAL TELEMATIC SOLUTIONS GTSECADOR S.A.	1920	DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2424	2137-16-EP	AUTO DE 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016
MARIO RODRIGO SERRANO CAMPOSANO Y CONCEPCIÓN LUCILA LEÓN CORONEL	3175	-	-	2180-16-EP	AUTO DE 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Total de Boletas: **(16) DIECISÉIS**

QUITO, D.M., 01 de diciembre del 2.016

*Andrés Fonseca Mosquera*  
Andrés Fonseca Mosquera  
SECRETARÍA GENERAL

16/12/16  
16/12/16  
01 Dic 2016  
AS/16



CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR

## GUÍA DE CASILLEROS CONSTITUCIONALES No. 650

ACTOR	CASILLA CONSTITUCIONAL	DEMANDADO O TERCER INTERESADO	CASILLA A CONSTITUCIONAL	NRO. DE CASO	FECHA DE RESO. SENT. DICT. PROV. O AUTOS
-	-	EDUARDO FLORENTINO AVELLÁN MORA	361	0128-14-EP	SENTENCIA NRO. 363-16-SEP-CC DE 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016
-	-	PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	018		
-	-	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	042	0235-13-EP	SENTENCIA NRO. 361-16-SEP-CC DE 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016
-	-	PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	018		
-	-	PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	018	1539-16-EP	AUTO DE 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016
JOSÉ JUVENAL MURQUINCHO MURQUINCHO	1368	PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	018	2230-16-EP	AUTO DE 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016
CARLOS ANDRÉS PASTOR PAZMIÑO Y OTROS	090	BRYAN TUALOMBO VALLEJO Y OTROS	710	0673-16-EP	AUTO DE 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016
-	-	PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	018	2137-16-EP	AUTO DE 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Total de Boletas: **(10) DIEZ**

QUITO, D.M., 01 de diciembre del 2.016

Andrés Fonseca Mosquera  
**SECRETARÍA GENERAL**

<b>CASILLEROS CONSTITUCIONALES</b>
Fecha: _____
Hora: <u>16:30</u>
Total Boletas: <u>10</u>



**CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR**

Quito D. M., 01 de diciembre del 2016  
Oficio Nro. 6224-CCE-SG-NOT-2016

Señores Jueces

**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE  
NACIONAL DE JUSTICIA**

Quito.-

De mi consideración:


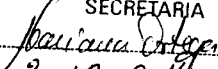
Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la Sentencia Nro. **363-16-SEP-CC** de 15 de noviembre del 2016, emitida dentro de la acción extraordinaria de protección Nro. **0128-14-EP**, presentada por la Rectora de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí "Manuel Félix López". Así mismo, devuelvo el expediente original Nro. 413-2010, constante en 01 cuerpo con 60 fojas útiles de su instancia.

Atentamente,

  
**Jaime Pozo Chamorro**  
**Secretario General**

Anexo: lo indicado  
JPCH/AFM



 <b>CORTE NACIONAL DE JUSTICIA</b>	<b>Sala de lo Contencioso Administrativo SECRETARIA</b>
Recibido por: 	
Fecha: <b>2-12-2016</b>	
Hora: <b>11:46</b>	
Quito Ecuador	



**CORTE  
CONSTITUCIONAL  
DEL ECUADOR**

Quito D. M., 01 de diciembre del 2016  
Oficio Nro. 6259-CCE-SG-NOT-2016

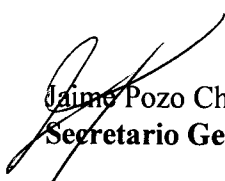
Señores Jueces

**TRIBUNAL DISTRITAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NRO. 4 DE  
MANABÍ Y ESMERALDAS**  
Portoviejo.-

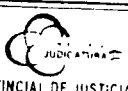
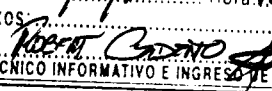
De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada de la Sentencia Nro. **363-16-SEP-CC** de 15 de noviembre del 2016, emitida dentro de la acción extraordinaria de protección Nro. **0128-14-EP**, presentada por la Rectora de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí "Manuel Félix López". Así mismo, devuelvo el expediente original Nro. 57-2009, constante en 06 cuerpos con 568 fojas útiles de su instancia.

Atentamente,

  
**Jaime Pozo Chamorro**  
**Secretario General**

Anexo: lo indicado  
JPCH/AFM

 CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE MANABÍ	
CON SEDE EN PORTOVIEJO RECIBIDO	
Fecha: 05/12/16	Hora: 16:49
Anexos: 	
TÉCNICO INFORMATIVO E INGRESO DE CAUSA	

## Andres Fonseca

---

**De:** Andres Fonseca  
**Enviado el:** jueves, 01 de diciembre de 2016 15:32  
**Para:** 'rectorado@espam.edu.ec'  
**Asunto:** NOTIFICACIÓN DE AUTO DE SENTENCIA Nro. 363-16-SEP-CC DENTRO DEL CASO Nro. 0128-14-EP  
**Datos adjuntos:** 0128-14-EP-sen.pdf

